



Por Nicolás Lynch

LA CLASE POLÍTICA PARLAMENTARIA

# Todopoderosos

**D**iera la impresión de que la mayor parte de la clase política parlamentaria, tanto oficialistas como opositores, luego de la caída de Fujimori, creyera que puede seguir haciendo lo que le da la gana. Los últimos hechos de alianzas extrañas que se repiten en el recinto parlamentario entre diversas agrupaciones de oposición y fujimoristas de variado pelaje, así como el bloqueo a medidas tan populares y necesarias como el distrito múltiple y las leyes anti-corrupción, hacen ver que a los políticos les sigue importando poco lo que expresa la sociedad organizada y aun lo que logra formarse como opinión pública.

Parece que la dinámica que el fujimorismo impuso al país en la última década de virtual "desconexión" entre políticos y ciudadanía les resulta muy cómoda a la mayoría de nuestros parlamentarios. En lo inmediato su interés estaría centrado en la reelección congresal o cómo permanecer a como dé lugar en sus curules. Para ello, la receta es muy clara: no hacer olas, bloqueando por ejemplo las leyes anti-corrupción y sacar de juego, en base a zancadillas laterales, a cuanto rival se les cruce en el camino. El problema es que la desconexión fujimorista floreció en una época de dictadura y clientelismo diferente a la actual que es de apertura democrática y relativo resurgimiento de la sociedad organizada. La desconexión, por lo tanto, en estos días merece la rápida censura ciudadana que seguramente se traducirá en las preferencias electorales de abril próximo.

Es más, como ya lo señaláramos en otra oportunidad, éste es un Congreso cuya legitimidad no proviene de las ánforas electorales, porque su elección es tan hija del fraude como la de Fujimori, sino de la buena conducta democrática que no está precisamente desarrollada en las acciones que comentamos. Corren entonces grave riesgo los parlamentarios que insisten en portarse haciendo oídos sordos a la ciudadanía, porque el Congreso puede caer en tal grado de desprestigio que se identifique a todos sus miembros con la componenda y el amarre tras bambalinas. Peor todavía, que este desprestigio arrastre al gobierno provisional y se ponga en peligro la transición en su conjunto.

Este comportamiento podría llevar también a la modificación del escenario electoral, disminuyendo drásticamente las posibilidades de los candidatos que surjan del parlamento y aumentando las de aquellos que provengan fuera de él y se solidaricen rápidamente con el creciente sentimiento anti-par-

lamentario. Jorge Santistevan así lo ha entendido y está tratando de sacarle el jugo al asunto, lo mismo que Alberto Andrade. Alejandro Toledo, por otra parte, es el que se encuentra en una posición más difícil al respecto ya que no parece conjugarse con las movidas parlamentarias de sus huestes pero representa, a la vez, a la primera fuerza democrática en el hemiciclo. Es más que seguro que deberá hilar muy fino para tomar distancia de los errores cometidos y mantener un claro perfil de consecuencia democrática.

La lección más importante de este espectáculo, sin embargo, trasciende largamente la coyuntura. La distancia abismal entre gobernantes y gobernados que el fujimorismo profundizó en la última década no



debe sobrevivir al actual proceso de transición. Ninguna institucionalidad democrática sólida puede establecerse en el Perú con la desconexión que observamos en los últimos días.

Si las cosas siguen así seguramente que vamos a inaugurar el año con importantes movilizaciones populares, pero no a favor de tal o cual candidato presidencial, sino en contra del comportamiento antojadizo del Congreso de la República. Por lo demás, esta institución debería autolimitar y no extralimitar sus funciones de aquí al 28 de julio. Quizás, su preocupación fundamental debería ser la de facilitar al Poder Ejecutivo y a los organismos electorales correspondientes los elementos necesarios para que lleven adelante de la mejor manera el proceso electoral. Deberían, por ello, dejar de lado las medidas extremas de "fiscalización" de lo que viene del Ejecutivo, propias de un Congreso plenamente legítimo, que no le corresponden y más bien desprestigian no sólo al Congreso sino sobre todo a la democracia frente a la ciudadanía.